con una óptica preventiva, para evitar que en la ONUB se pudiera producir la situación que ha tenido lugar en el país vecino, aunque a finales de año tuvieron lugar las primeras denuncias sobre abusos sexuales cometidos por personal de la ONUB.

Cuadro 9.3. La perspectiva de género en la MINUSTAH

La misión de mantenimiento de la paz en Haití, MINUSTAH, está siendo pionera en la incorporación de la perspectiva de género de una manera integral y en todas las fases del proceso. El eje central de este trabajo de género está formado por la figura de la asesora de Género, Nadine Puechguirbal, que ha formado parte de la misión desde la fase de su diseño. El papel de la asesora es el de promover, facilitar, apoyar y supervisar la incorporación de la perspectiva de género en las misiones de mantenimiento de la paz. El informe del secretario general de la ONU sobre Haití, de abril de 2004, ya recomendaba en lo relativo al mandato de la misión que se incorporase la perspectiva de género en todas las políticas, programas y actividades de la misión, y la Resolución del Consejo de Seguridad 1.542 (2004), por la que se establece la MINUSTAH, recoge la Resolución 1.325 y hace referencia a la situación y participación de las mujeres en diversos aspectos, tales como la desmovilización, desarme y reinserción, la participación en elecciones, la protección de los derechos humanos de las mujeres y el acceso a la asistencia humanitaria.

Se trata de la primera vez que la figura de la asesora de género está presente desde el inicio de la misión, lo que debería facilitar la incorporación de esta perspectiva en las diferentes dimensiones de la misión. Los objetivos iniciales han sido la colaboración estrecha con todos los componentes de la misión para garantizar la transversalidad de género y la implicación en el trabajo de las organizaciones locales de mujeres. La presencia de la asesora de género ha servido para reactivar el Grupo de Trabajo de Género con representantes de las diferentes agencias de Naciones Unidas en el país. No obstante, la reducida participación de mujeres en la misión pone de manifiesto el largo trecho por recorrer hasta alcanzar los requerimientos establecidos en la Resolución 1.325.

e) Desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de las mujeres combatientes

A lo largo del año 2004 diversas organizaciones de mujeres, así como Naciones Unidas, han reflexionado acerca de la participación de las mujeres en los procesos de DDR, y sobre la necesidad de mejorar el acceso a éstos de las mujeres que han participado en los conflictos armados como parte de los grupos o FFAA implicadas. Las concepciones restrictivas existentes hasta el momento de la figura del combatiente han dejado de lado a muchas mujeres como beneficiarias de estos programas, dificultando su reinserción en la vida civil tras el fin de las hostilidades, agravando situaciones de pobreza, exclusión y explotación sexual, y reforzando la estigmatización que en numerosas sociedades sufren las mujeres que de una u otra manera se han visto involucradas en los enfrentamientos armados no como población civil, sino como integrantes de las partes contendientes.

Generalmente se ha contemplado al combatiente como un hombre joven en posesión de un arma. Esta visión deja fuera a aquellas personas, fundamentalmente mujeres y menores que han desempeñado otro tipo de tareas, como las de logística y sostenimiento de los combatientes armados, y por supuesto a aquellas mujeres que fueron forzadas a actuar de esclavas sexuales tanto de los grupos armados de oposición como de determinadas FFAA regulares. Por esta razón, UNIFEM recomienda que se elabore una definición que permita que los criterios para poder ser participe de los programas de DDR sean lo suficientemente amplios para que todas las mujeres y las niñas que hayan estado vinculadas a las fuerzas enfrentadas sean incluidas en éstos, independientemente de si poseen o no armas. Además, es necesario tener en cuenta que aunque algunas mujeres forman parte de los actores armados por su propia voluntad, en numerosas ocasiones esta participación es forzada mediante la abducción.

Las mujeres quedan masivamente excluidas de estos procesos de DDR

La constatación de que las mujeres quedan masivamente excluidas de estos procesos de DDR debería llevar a que estas recomendaciones fueran tenidas en cuenta a la hora de diseñar los programas, así como de reformular los que actualmente se están llevando a cabo y en los

que se ha verificado la exclusión de las mujeres como beneficiarias. Y no sólo para su participación en igualdad de condiciones con los combatientes, sino para que se incorporen sus necesidades específicas (incluyendo la protección frente a la violencia sexual), así como las de los menores a su cargo a la hora de establecer los proyectos de acantonamiento, reintegración y canje de armas, tal y como se establece en la Resolución 1.325 (2000).

Un mandato más activo, así como un mayor conocimiento en cuestiones de género y una mayor participación de mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz, debería permitir que la desmovilización de las mujeres supusiera una transformación de las relaciones de género en aquellas sociedades en proceso de rehabilitación posbélica, y no un mantenimiento del *status quo*, que hasta el momento ha tenido como consecuencia, entre otros aspectos, los elevados índices de violencia de género que se dan en muchos de estos contextos, así como retrocesos en determinados avances logrados por las mujeres durante el período de conflicto armado, en materia de autonomía, participación en el ámbito productivo y de toma de decisiones, entre otras cuestiones.

f) Violencia sexual como arma de guerra

La violencia sexual está siendo una de las armas de guerra más presente en los conflictos armados de la actualidad. A lo largo de este año se han repetido las denuncias sobre este hecho, las más importantes las que han evidenciado su utilización masiva en la región de Darfur en Sudán¹⁴ y en RD Congo. Estas denuncias no hacen sino poner sobre la mesa el fracaso de los sistemas de protección de la población civil y especialmente de las mujeres y niñas, frente a determinadas atrocidades como la violencia sexual. Los campos de personas refugiadas y desplazadas, a merced de actores armados en múltiples ocasiones, son con frecuencia escenario de este tipo de abusos. Así lo ha reconocido el secretario general en el informe sobre las mujeres y la paz y la seguridad anteriormente analizado¹⁵. Su uso, que responde de manera clara a la lógica de los conflictos armados contemporáneos, no busca únicamente la denigración de las mujeres y niñas que la padecen, sino la humillación y desintegración de toda la comunidad considerada enemiga.

Además, el hecho de que esta violencia contra las mujeres perviva con el fin de las hostilidades armadas, como evidencian los elevados índices de violencia de género en los contextos en rehabilitación posbélica, hace necesario que se redoblen los esfuerzos de acompañamiento y asistencia a las supervivientes de esta violencia, además de acabar con la impunidad en la que acostumbran a quedar los crímenes de violencia sexual contra las mujeres cuando finalizan los conflictos armados. Esta impunidad está favoreciendo la utilización de la violencia sexual por parte de los actores armados.

Una de las múltiples consecuencias de la violencia sexual en contextos bélicos es que se está constituyendo en un factor de expansión de la pandemia del VIH/SIDA entre la población civil, fundamentalmente en las mujeres. Como señala ONUSIDA, la población militar es una de las más afectadas por la enfermedad¹⁶, lo que unido a determinadas conductas sexuales abusivas, así como la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran muchas mujeres frente a quienes ejercen la violencia o quienes llevan a cabo el suministro de la ayuda alimentaria, está favoreciendo la propagación de la pandemia en algunos contextos de conflicto armado.

Por otra parte, Amnistía Internacional ha denunciado cómo las restricciones a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer efectuadas por algunos países, la están debilitando como instrumento efectivo para proteger a las mujeres frente a la violencia. Estas restricciones que han efectuado algunos países de Oriente Medio y el Norte de África están vaciando de contenido la Convención como herramienta de protección. Esta situación se produce a pesar de que la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción reafirman la necesidad de que las restricciones que los estados puedan efectuar no deberán afectar al contenido central y esencial de la Convención.

Por su parte, la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, en su informe anual ha destacado que, a pesar de que en los últimos años la cuestión de la violencia contra las

14. Véanse Barómetros 5 y 6 <<http://www.escolapau.org/programas/barometro05.htm>> y <<http://www.escolapau.org/programas/barometro06.htm>>.

15. El informe constata violencia sexual y de género en Afganistán, Burundi, Chad, Côte d'Ivoire, RD Congo y Darfur.

16. ONUSIDA recoge que las enfermedades de transmisión sexual afectan entre dos y cinco veces más al personal militar que a la población civil en tiempos de paz, y que en tiempos de conflicto armado el riesgo puede ser de cincuenta veces más.

mujeres ha ganado un espacio público y se ha reconocido la importancia de su eliminación para fortalecer los derechos humanos de las mujeres, en paralelo se está produciendo un proceso de normalización y despolitización de esta violencia. La Relatora señala que la utilización de un lenguaje neutro para describir algunas formas de violencia, el recorte en los fondos destinados a programas de mujeres con la excusa de la transversalidad de género (desvirtuando este concepto) y la adopción de medidas conciliatorias para hacer frente a la violencia contra las mujeres son algunos de los hechos que evidencian esta despolitización.

Cuadro 9.4. *Gender Mainstreaming*

Gender Mainstreaming, según establece Naciones Unidas, es el proceso de evaluación de las implicaciones que para hombres y mujeres tiene cualquier acción planificada, incluyendo la legislación, las políticas o programas y en todos los niveles. Es una estrategia para que las preocupaciones y experiencias tanto de hombres como de mujeres sean una dimensión integral del diseño, aplicación, monitoreo y evaluación de las políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, para que mujeres y hombres se beneficien por igual y no se perpetúe la inequidad. Se trata de un medio con el objetivo final de alcanzar la equidad de género.

Fuente: ECOSOC *Agreed Conclusions*, 1997/2.

A modo de **conclusión** del capítulo, cabe señalar que el año 2004 ha sido un año en el que se han iniciado y se han llevado a cabo procesos de reflexión y evaluación de los logros alcanzados en el trabajo de las mujeres por la paz, así como de revisión de los instrumentos creados en la última década, procesos que culminarán en 2005. Diez años después del hito que marcó la IV Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing muchos de los retos entonces planteados siguen pendientes (mayor participación femenina en los órganos de toma de decisiones, fin de la violencia contra las mujeres, participación en todas las fases de los procesos de paz, entre otras cuestiones), pero también han aparecido nuevos instrumentos que han surgido del trabajo activo en todos los niveles sociales de las mujeres, como la Resolución 1.325 del Consejo de Seguridad sobre las mujeres, la paz y la seguridad o los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta legitimidad no ha venido acompañada, sin embargo, de la voluntad de situar las aportaciones y necesidades de las mujeres en el centro del debate y de la agenda política de la construcción de la paz.

Tal vez sea el momento de plantear la necesidad de la celebración de una nueva cumbre mundial de las mujeres que otorgue la centralidad política necesaria para que todos los esfuerzos de la última década, así como las tareas pendientes, reciban el reconocimiento y el impulso necesarios.